

Panamá: la democracia prometida

Leis, Raúl

Raúl Leis: Sociólogo panameño. Director del Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA).

En la madrugada del 20 de diciembre de 1990, no es el tronar de la metralla y de las bombas lo que domina el desolado panorama de lo que quedó del barrio del Chorrillo. Un viento fresco hace titilar cientos de velas que iluminan pequeños altares y cruces. Los sobrevivientes salieron de los tugurios, hangares y miniapartamentos donde ahora viven y llenaron de luz el recuerdo de los horrores de la invasión. En el templo de Fátima - una de las pocas edificaciones todavía en pie - se celebró un rito ecuménico y después miles de personas realizaron una procesión del silencio.

Horas después, en una soleada tarde, muchos más invadieron el barrio y rompieron la desolación con consignas, gritos, pancartas y cantos. Los organizadores la llamaron la Gran Marcha Negra en alusión al luto y como una antónima respuesta en la distancia a las marchas blancas de la Cruzada Civilista, que llenó de blanco las protestas contra el régimen de Noriega. Al frente iban los familiares de los desaparecidos y muertos, y en su camino la marcha hizo un alto para vitorear a los dirigentes sindicales en huelga de hambre en la Iglesia de Don Bosco. Ellos protestaban por el despido de cientos de trabajadores estatales, acaecido a raíz del paro nacional del 5 de diciembre.

A lo largo de 1990 se produjeron aceleradamente cambios alquímicos en la conciencia de muchos panameños. Del rechazo masivo al régimen de Noriega, profundizado por las sanciones de Estados Unidos, que abrió las puertas a la invasión norteamericana y sus secuelas, la población expresó su descontento y rechazo al gobierno que obtuvo la victoria en las elecciones de mayo de 1989, pero que se juramentó en una base militar norteamericana.

La tierra prometida

¿Qué pasó con la democracia y el bienestar que Estados Unidos prometió a raíz de la cruenta invasión? A más de un año de ella, Panamá es un país ocupado con un gobierno tutelado con muy poca capacidad de autonomía y, eso sí, decidido a impulsar un modelo de ajuste económico impopular y antinacional. La democracia

existente es cada vez más elitista y restringida, con menores espacios para los actores sociales y populares. Por otra parte se da un crecimiento objetivo de las protestas y de acumulación organizativa, pero son reclamos con escasa capacidad de generar propuestas, lo que parece equiparable a otros países de la región.

A un año de la invasión, todavía no se conoce una cifra exacta de los muertos, heridos, afectados y traumatizados por la acción militar. El Comando Sur, el gobierno panameño y la Iglesia lo sitúan en 600 y menos. Grupos de Derechos Humanos y comisiones como la del ex-procurador norteamericano Ramsey Clarke lo estiman en varios miles. Lo cierto es que existe una conspiración de silencio entre los gobiernos de Bush y Endara para que no se conozca la verdadera magnitud de la invasión en términos de vidas humanas. El Comité de Familiares de Muertos y Desaparecidos del 20 de diciembre logró la apertura de dos fosas comunes en territorio panameño conteniendo una de ellas 120 cadáveres, en su mayoría de civiles. Se estima que existen por lo menos 12 fosas comunes más, pero situadas en áreas bajo control militar norteamericano en las riberas del canal.

A un año de la invasión, no se ha logrado una solución definitiva para los refugiados de guerra y damnificados de las áreas afectadas por la acción militar, en especial a los 15 mil moradores del barrio del Chorrillo. Muchos sobrevivientes siguen habitando en hangares y lugares de condiciones precarias. Menos aún se les ha reconocido o indemnizado por sus parientes muertos, desaparecidos o heridos.

A un año de la invasión, la situación económica sigue siendo desesperante. La ayuda ofrecida por los Estados Unidos ascendió a sólo 420 millones de dólares, de los cuales menos de la mitad han sido desembolsados. La suma prometida fue condicionada a la puesta en práctica por parte de Panamá de las medidas de ajuste y al cumplimiento de tratados bilaterales que de cumplirse le asestarían un golpe mortal al centro bancario, según declaraciones de los mismos personeros del gobierno panameño. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Panamá entre 1987-1989 significaron alrededor de 2 mil millones en lucro cesante. La invasión y los saqueos provocados por ella le costaron otros 2 mil millones a la economía panameña.

A un año de la invasión, Panamá sigue desposeída del principal atributo de una nación: su soberanía. Sin ella un país no tiene alma. Estados Unidos ocupa militarmente el país violando abiertamente tratados internacionales. Estados Unidos determina el comportamiento de la escena oficial, los coroneles del Comando Sur acompañan a los ministros panameños en sus giras con campañas de acción cívico

militar. Estados Unidos aniquiló a raíz de la invasión al ejército panameño y ha creado una Policía Nacional totalmente supeditada a su hegemonía.

Recientemente la prensa norteamericana divulgó la existencia de un Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional adscrito a la Presidencia de la República. Sus cien agentes fueron entrenados por la CIA que además aporta 2 millones anuales para su funcionamiento. El responsable de organizar esta oficina es Dimitrius Pappas, quien estuvo involucrado en el caso Irán-Contras y participó en la formación de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Este agente actúa en estrecha coordinación con la embajada de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia militar 470 del Comando Sur en Panamá.

Este contradictorio panorama tuvo dos momentos críticos: las movilizaciones obreras y la maniobra golpista cerrando el año 90, y las elecciones parciales de enero del 91. Ambos fueron expresión del rechazo de la población a la situación vivida.

Los trabajadores en la mira

Para los primeros días de diciembre de 1990, los trabajadores del país agrupados en la Coordinadora Nacional por el Derecho a la Vida habían convocado a dos actividades fundamentales para su lucha. El 4 de diciembre, una marcha multitudinaria por las principales avenidas de la ciudad que constituía la llave para lograr el éxito del gran paro nacional del 5 de diciembre. Pero a la misma hora de la marcha el ex-coronel Eduardo Herrera se escapaba de la cárcel y emprendía - al mando de un puñado de hombres coincidiendo con el paro nacional, una especie de sublevación militar que fue aplastada por el ejército de Estados Unidos a petición del gobierno de Guillermo Endara. Las autoridades panameñas no tardaron en acusar a los trabajadores de golpistas y desatar despidos masivos, «legitimizados» días después por la aprobación a tambor batiente en la Asamblea Legislativa con la ley 25.

¿Qué pedían los trabajadores? El cese de los despidos masivos e injustificados en los sectores público y privado, que engrosa el problema del desempleo - el cual oscila en un 25% de la población económicamente activa. El respeto al fuero sindical y maternal, que intentan ser limitados a través de una serie de reformas al código laboral. Un alto a la política apresurada de privatización que está provocando el cierre de empresas estatales, aun las productivas. La instauración de la carrera administrativa que protege al empleado público, y la restauración del «decimotercer mes» - bonificación de un mes adicional de sueldo al año -, que fue suspendido por el gobierno de Endara.

Estas demandas eran la respuesta de sobrevivencia de miles de trabajadores en un país de 2.3 millones de habitantes, donde más de un millón está bajo la línea de pobreza, y donde existen 150 mil desempleados y 200 mil subempleados. La Coordinadora Nacional por el Derecho a la Vida había logrado unificar a prácticamente todas las organizaciones laborales del país, superando divisiones y sectarismos y presentando un frente unido contra las pretensiones del gobierno.

Panamá posee uno de los movimientos obreros más antiguos de América Latina, pero es también muy especial. Fue con la construcción del ferrocarril transístmico en 1850 por Estados Unidos cuando se importan grandes masas de inmigrantes de Europa, Asia y el Caribe, que luego siguen llegando en el intento de construcción del canal francés en 1880 y de la construcción del canal por Estados Unidos en 1904-1914. Es decir, la clase obrera es foránea y transitoria, pues muchos de los inmigrantes se retiran después de concluidos los trabajos, pero en el interín escenifican importantes protestas y difunden ideas y corrientes políticas e ideológicas.

El movimiento obrero panameño se hace más nacional y permanente de 1920 hacia adelante, con luchas reivindicativas que durante el gobierno de Torrijos cristalizan en un código de trabajo relativamente moderno. Los militares hacen esfuerzos notables por captar al movimiento sindical convirtiéndolo parcialmente en su base social. Los trabajadores aun así no cejan, y en 1980, 83, 85 y 86 emprenden paros nacionales; y los trabajadores estatales lo que llaman Jornadas de Protesta.

La crisis en torno a Noriega en 1987, saca del juego al movimiento sindical hasta después de la invasión cuando propone el paro del 5 de diciembre de 1990.

Es claro que el gobierno Endara - tutelado por los Estados Unidos - tiene en la mira al movimiento laboral con la intención de neutralizarlo, para tener mano libre en la implementación del modelo económico neoliberal, y para descalificarlo como oposición política «no deseable» en su esquema de democracia restringida.

Debilidad gubernamental

El gobierno, por su parte, se encuentra en un punto muy bajo de popularidad con sólo la tercera parte de la opinión ciudadana a su favor, que contrasta con el 80% con que contó a principios de año. Esta impopularidad tiene varias razones. Su ineptitud manifiesta y señales de nepotismo y corrupción de diversa índole. La imposición del programa de ajuste bajo el amparo de la política fondomonetarista. La indiferencia frente a los problemas sociales y demandas populares. La evidente su-

bordinación del gobierno a la voluntad imperial de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno también adolece de una base represiva eficaz propia, teniendo que apoyarse en las tropas del Comando Sur que ocupan el país.

Oposición popular

Una cosa que favorecía al gobierno era la inexistencia de una oposición política significativa y organizada que aprovechara estas debilidades. El Partido Revolucionario Democrático, ligado al gobierno de Noriega, se encontraba en un estado de prostración política. La izquierda débil y dividida, y un movimiento popular desorganizado y cooptado por los años de dictadura. Pero es cierto que cada día 20 de mes salían manifestaciones condenando la invasión o se daban movilizaciones parciales reivindicativas. Estas acciones se fueron acumulando hasta lograr con la Coordinadora la unidad de las diversas fuerzas con capacidad de convocar, a casi un año de la invasión, a un paro nacional, que unía lo reivindicativo con la demanda de soberanía. El gobierno y Estados Unidos tenían la constatación de que la oposición se organizaba coherentemente, pero a través del sujeto social (organizaciones y grupos populares) más que a través de un sujeto político (partidos y vanguardia). Además esta formación poseía una identidad popular y de alguna manera nacionalista. Es decir, no era la oposición potable y moderada con capacidad de alternar el poder, sino una oposición negra, india, pobre y con sentido patriótico.

Maniobra

Entonces era necesario contrarrestarla. ¿Cómo hacerlo en un momento en que la popularidad gubernamental estaba por el suelo? Aupando una «conspiración». Casando ambas cosas: golpe y paro, y situando al movimiento social reunido en torno a la Coordinadora prácticamente fuera de la ley.

De allí el curioso escape del coronel Herrera de una cárcel rodeada de bases norteamericanas, su sublevación con un grupo de hombres que además sólo pedían reivindicaciones básicas y no el poder. Esto afectó la realización del paro, pues muchos temieron ser despedidos y además involucrarse en un movimiento sedicioso. También existía un antecedente: el 16 de octubre, cuando se desarrolló una gran marcha laboral que dio lugar al nacimiento de la Coordinadora, el gobierno acusó a Herrera de conspirar (luego fue arrestado) involucrando en la acusación a dirigentes sindicales. Es bueno recordar que Herrera fue un militar opositor a Noriega en los últimos meses de su gestión, y que luego dirigió la nueva policía por 7 meses con el beneplácito de Estados Unidos hasta que tuvo roces con Endara.

Pero hay tiros que salen por la culata. La maniobra fue rechazada por la mayoría de los panameños, al sentir la acción militar de Estados Unidos como un «pequeño 20 de diciembre». El saldo fue de un muerto y varios heridos, toque de queda en una populosa barriada, y la población protestando a viva voz por la presencia estadounidense. El gobierno de Endara nuevamente demostró su incapacidad y debilidad, además de su entreguismo, al tener que recurrir - una y otra vez - a un ejército extranjero para controlar un conato cuando proclamaba que la mayoría de los militares de la policía panameña era leal al gobierno. Además no intentó movilizar a su base de apoyo, ni responder cívicamente a la débil asonada.

COLINA.... otra vez en escena

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) es un partido producto de un extraño nacimiento. Fue creado de arriba hacia abajo, desde las cumbres burocráticas del Estado, por un general Torrijos urgido en tener una organización política en momentos en que la firma de los tratados canaleros de 1977 abrían una fase de democratización en el país.

Luego de la muerte del general en 1981, el PRD vivió las marejadas de las continuas crisis políticas que hicieron desfilar una larga lista de presidentes por el palacio de gobierno. Su estrecha relación y subordinación hacia los militares, en especial los que sucedieron a Torrijos y su apego al poder que les dio la vida, hizo que esta organización perdiera legitimidad y apoyo en forma acelerada. Después de la última intervención militar de Estados Unidos, el 20 de diciembre, el PRD pareció reducirse a su mínima expresión, arrastrando el desprestigio e impopularidad de Noriega, arrojado del gobierno a cajas destempladas, pletórico de cismas internos, parecía estar en la agonía política.

Con este marco y provisto de una gran confianza en sí mismo, el gobierno se apresó a celebrar el 27 de enero de 1991 elecciones parciales para elegir a 9 legisladores, 160 representantes de corregimientos y 10 concejales, en un torneo en el que debían votar 200 mil personas. Estas elecciones dilucidarían finalmente los resabios de las irregulares de mayo de 1989, ampliamente ganadas por la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC), y que fueron anuladas abruptamente durante el régimen de Noriega. En esos momentos casi el 70% de los votantes favoreció a la ADOC con un voto reactivo apuntado más contra Noriega que a favor de los civilistas apoyados por Estados Unidos.

El resultado de las votaciones parciales sorprendió a todos, empezando por la propia Coalición de Liberación Nacional (COLINA), nombre de la alianza compuesta

por el PRD, el Partido Laborista, y el Partido Liberal (de la línea Popito Chiari). Primero, el hecho de que más de la mitad de los electores se abstuvieran de votar. Segundo, el hecho de que aunque en cifras globales la ADOC obtuvo aproximadamente el 55% de la votación en su conjunto, COLINA consiguiera cinco de las nueve legislaturas disputadas.

Este resultado tiene su explicación. Las elecciones parciales se hicieron con los mismos partidos que participaron en las elecciones generales de 1989. Los electores mostraron su rechazo al gobierno de Endara, primero absteniéndose masivamente, y segundo votando en su contra a través de los únicos partidos opositores.

A pesar de que este resultado no cambia sustancialmente la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa (12 bancas de COLINA contra 55 oficialistas), el resultado es obviamente una victoria política que anima el resurgimiento de COLINA como referente electoral, aunque resulta difícil que logre convertirse en una fuerza significativa con capacidad de conquistar el poder en las elecciones generales de 1994.

Más bien las simpatías de la gente parecen volcarse a una eventual tercera fuerza que supere el recuerdo del militarismo de Noriega y de la democracia tutelada de Endara.

El peso de COLINA es pues otra señal para medir la impopularidad del gobierno. El movimiento laboral expresó el sentir de las masas urbanas y las elecciones sobre todo el de las masas rurales (fueron en su mayoría en zona rural), que ante la inexistencia de formas organizativas castigaron con la indiferencia unos, y el voto otros, lo que consideran abandono y desidia.

La democracia prometida huele a humo y a cañón. Está alejada de los intereses populares y nacionales. Pero en ella Panamá despierta del letargo e identifica los cantos de sirena. El juego es nuevo, pero las cosas están más definidas para la mayoría de los panameños. Está cada vez más claro quiénes conforman los bandos y cuáles son sus intereses. Los jugadores enseñan sus cartas y los retos están planteados. La democracia prometida no es bonanza y fue decretada a sangre y fuego por un ejército invasor que todavía se pasea por el país. Las velas en el Chorrillo no sólo recuerdan los muertos sino que titilan por el derecho a la vida.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 112 Marzo-Abril de 1991, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.